



Poder Judicial de la Nación

**CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2**

**CAUSA N°140209/2017**

**AUTOS: O.S. PERS.EDIF.DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA R.A. c/  
ANCHORENA 976 CONSORCIO DE PROPIETARIOS s/EJECUCION LEY 23660**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

**EL DOCTOR WALTER FABIÁN CARNOTA DIJO:**

Vuelven las actuaciones a sentencia con motivo del pedido de aclaratoria formulado por la ex -representación letrada de la parte actora, Dra. Susana Lidia Bonet, quien sostiene que sus estipendios deben regularse de acuerdo a los lineamientos de la ley 27.423 en tanto la totalidad de las tareas del juicio ejecutivo se practicaron bajo su vigencia.

En primer lugar cabe señalar, que si bien la actuación del juzgador, con posterioridad al dictado de la sentencia, debe limitarse a corregir un error material, aclarar un concepto oscuro, o suplir una omisión en la que se hubiese incurrido (conf. art. 166 inc. 2), el más Alto Tribunal ha considerado la facultad de rectificar su sentencia en los supuestos de error de hecho evidente (cfr. Causa A 478 XXI, del 18/5/89 “ACELCO S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR CHACOFI S.A.” E.D. 9/10/89).

La presencia de un error de hecho evidente o una conclusión equivocada fundada en circunstancias fácticas indebidamente apreciadas, o la existencia de vicios de extrema gravedad, justifican la nulidad del pronunciamiento, ya que su mantenimiento implicaría resultados incompatibles con el servicio de justicia (esta Sala en autos “STESCOBICH ESTHER BEATRIZ C/ANSES S/PRESTACIONES VARIAS” Sentencia Interlocutoria de fecha 12/4/22).

En el caso bajo análisis, se ha incurrido en un error involuntario en el decisorio de fecha 8 de noviembre de 2022 al confirmar la resolución de primera instancia que reguló honorarios en base a la ley 21.839 modificada por ley 24.432, lo que no guarda relación con la situación fáctica sometida a consideración del Tribunal, en tanto las tareas profesionales correspondientes a la segunda etapa ejecutiva, se han realizado en plena vigencia de la ley 27.423.

En consecuencia, corresponde declarar su nulidad y abocarse al tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la Dra. Bonet el 30 de marzo de 2022 contra la resolución de fecha 23 de marzo de 2022.



#31123875#354257247#20231012121138845



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

De las constancias digitales surge que la obra social del personal de edificios de renta y propiedad horizontal, inició demanda ejecutiva en los términos del art. 24 de la ley 23.660 contra el Consorcio de Propietarios del edificio de la calle Anchorena n° 976 el 27 de diciembre de 2017, con fecha de carga INI el 1 de febrero de 2018.

El magistrado de grado el 31 de mayo de 2018 dicta sentencia mandando llevar adelante la ejecución contra el consorcio demandado, hasta hacerse íntegro pago de la suma de \$ 35.446,94 en concepto de capital e intereses, sin perjuicio del monto correspondiente por intereses hasta el momento de su efectivo pago, calculados sobre el capital nominal consignado en el certificado de deuda, con más sus intereses legales establecidos en las resoluciones que detalla y regula “los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la ejecutante y ejecutada, respectivamente, en las sumas fijas de \$ 2.729,41.- y \$ 1.736,90.-, teniendo en cuenta la extensión, calidad e importancia de los trabajos efectivamente realizados y las disposiciones legales vigentes (arts. 1, 3, 6, 8 y conc. ley 21.829 y Art. 13 de la ley 24.432)” (sic).

Ello se encuentra firme y consentido por las partes, motivo por el cual no corresponde hacer consideración alguna al respecto.

Ahora bien, la representante legal de la parte actora el 27 de septiembre de 2018 acompaña liquidación de capital e intereses y honorarios, que es aprobada judicialmente. Ante la incomparecencia de la demandada, el 1 de febrero de 2019 inicia el trámite para la percepción forzada del crédito, realizando diversas presentaciones. Finalmente, el 29 de diciembre de 2021 la Dra. Bonet denuncia la revocación del mandato, solicitando regulación de honorarios por las tareas desarrolladas en la segunda etapa, en los términos previstos en los arts. 15, 16 inc. a, y el mínimo legal de 6 UMA que dispone el art. 58 inc. b de la ley 27.423.

El 23 de marzo de 2022 el “a quo” regula los emolumentos peticionados considerando el resultado obtenido y la extensión de las tareas desarrolladas, “...en la suma de \$ 750.- (cf. Arts. 1, 3, 6, 7, 13, 40 y conc. ley 21.829 y Art. 13 de la ley 24.432), **monto que resulta comprensivo de la actividad procesal desarrollada con posterioridad a la regulación habida con fecha 31/05/2018 en el marco del presente proceso de ejecución y hasta la fecha del dictado de la presente.**”(sic) (el resaltado me pertenece).

Entiendo que la aplicación de las leyes 21.839 y 24.432 a los fines de valorar las labores realizadas en el período 31 de mayo de 2018 al 23 de marzo de 2022, resulta contrario a lo oportunamente resuelto por el Máximo Tribunal en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A c/ Misiones, Provincia de s/ Acción declarativa” (sentencia del 4 de septiembre de 2018), precedente que no ha sido modificado explícitamente por la CSJN.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En efecto, en dicho precedente, en el considerando 3º) segundo párrafo, expresamente se dispuso: "... en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación (Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros). ... el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución...".

En definitiva, las tareas realizadas a partir del 31 de mayo de 2018, en lo que respecta a la segunda etapa ejecutiva, deben regirse por la Ley 27.423.

Aclarada la ley de aranceles aplicable al caso, en referencia al mínimo legal solicitado en los términos del art. 58, expresamente dispone: "El mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de apreciación pecuniaria que no estuviesen previstos en otros artículos será el siguiente: ... b) En los ejecutivos, de seis (6) UMA;...".

Ahora bien, los mínimos que establece la norma precedentemente citada refieren a los procesos completos (en este sentido ver Cámara Federal de Corrientes, Sentencia de fecha 21 de junio de 2023 en los autos caratulados "DOS SANTOS, CAROLINA ELIDA C/ANSES S/AMPARO LEY 16986" Expte. FCT 13000168/2001/CA1). Así también "... La lógica indica que cualquiera de los topes básicos mínimos... hacen referencia a la totalidad de las labores que conforman un proceso o un trámite. Esta interpretación ha sido validada por la jurisprudencia en general con basamento en que los mínimos fijos deben necesariamente vincularse con la actuación conjunta y sucesiva de cada letrado y relacionarse debidamente con las etapas del proceso cumplidas" (conf. Guillermo Mario Pesaresi, "Honorarios en la Justicia Nacional y Federal-Ley 27423 anotada, comentada y concordada", págs..402 y 403, Ed. Cathedra Jurídica).

En el caso particular de autos, como ya señalé anteriormente, los trabajos realizados en la primera etapa ejecutiva hasta el dictado de la Sentencia de fecha 31 de mayo de 2018 ya han sido objeto de regulación de honorarios, encontrándose firmes. En razón de ello, solo corresponde a esta Alzada justipreciar las labores desempeñadas por la Dra. Bonet en la segunda etapa ejecutiva -en los términos del art. 29 inc. f- durante el período 31/5/18 al 29/12/21, fecha esta última en la que se le ha revocado el mandato.

Es por todo ello que, teniendo presente el monto del proceso (art. 16 inc. a) y las tareas desarrolladas en la segunda etapa ejecutiva -que aún no ha sido cumplida- (art.19 inc. f), en mérito a la extensión y calidad de las tareas efectuadas corresponde fijar los honorarios de la Dra. Susana Lidia Bonet T° 12 F° 812 en la cantidad de tres UMA





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

equivalentes -a la fecha del dictado de la presente resolución- a la suma de \$ 76.119 (conf. Res. CSJN 2722 /2023 y art.51 de la ley 27.423).

Por lo expuesto propicio: 1) Declarar la nulidad de la Sentencia Interlocutoria de fecha 8 de noviembre de 2022; 2) Revocar los honorarios regulados en la resolución de fecha 23 de marzo de 2022; 3) Fijar los emolumentos correspondientes a la Dra. Susana Lidia Bonet T° 12 F° 812, por las tareas desarrolladas en la segunda etapa ejecutiva, en la cantidad de tres UMA equivalentes a la fecha del dictado de la presente resolución a la suma de \$ 76.119 (conf. Res. CSJN 2722 /2023, arts. 16, 29 inc. f, 51 y 58 de la ley 27.423), con la adición del IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación” sent. del 16/06/93).

### **LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

Adhiero al voto que antecede.

### **EL DOCTOR JUAN ALBERTO FANTINI ALBARENQUE DIJO:**

Disiento del voto que encabeza el presente decisorio en cuanto a la solución propiciada a la aclaratoria solicitada.

La cuestión a dirimir se centra en el pedido de aclaratoria formulado por la Dra. **Susana Lidia Bonet**, abogada, por su propio derecho, ex -representación letrada de la parte actora-; sostiene que, habiéndose entablado la demanda y, por ende, realizado todas y cada una de las tareas bajo la vigencia de la nueva ley arancelaria, solicita se aplique dicha normativa a los fines de la elevación de los honorarios y regulación “en UVA” (sic).

El referido remedio, tiene por objeto corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro y/o suplir omisiones en el pronunciamiento (arts. 166 inc. 2° y 36 inc. 3° del C.P.C.C.N.).

La resolución en crisis, que fue dictada por esta Sala el 8 de noviembre de 2022, dispuso confirmar la resolución del Sr. Juez de grado de fecha 23 de marzo de 2022. Allí, el magistrado “a quo”, proveyó el pedido de regulación de honorarios de la Dra. Bonet en la suma de \$ 750 (cf. Arts. 1, 3, 6, 7, 13, 40 y conc. ley 21.829 -sic- y Art. 13 de la ley 24.432). El destacado no obra en el original y me pertenece.

De las constancias que surgen del sistema Lex100, se advierte que se procedió al sorteo (código SOJ) de las actuaciones el día 27 de diciembre de 2017 y la mesa receptora web las recibió con fecha 28/12/2017 (CODIGO REC). Asimismo, se desprende que el INI (inicio de trámite de las actuaciones) fue cargado el día 1 de febrero de 2018.

La demanda fue suscripta por la Dra. Bonet y allí se consignó como monto reclamado la suma de pesos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con noventa y





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

cuatro centavos (\$ 35.446,94.-), monto determinado con sus intereses correspondientes hasta el 22/09/2016.

El 31 de mayo de 2018 se dictó sentencia de trance y remate, por la que se dispuso llevar adelante la ejecución y se regularon los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la ejecutante y ejecutada, respectivamente, en las sumas fijas de **\$2.729,41.- y \$ 1.736,90.-**, teniendo en cuenta la extensión, calidad e importancia de los trabajos efectivamente realizados y las disposiciones legales vigentes (arts. 1, 3, 6, 8 y conc. ley 21.829 y Art. 13 de la ley 24.432).

El 23 de marzo de 2022, la Dra. Bonet se presentó en autos, denunció revocación del poder oportunamente otorgado a su favor por la parte actora y solicitó regulación de honorarios por las tareas realizadas en etapa de ejecución, invocando una base regulatoria de \$ 80.361,33.-, peticionando una regulación no menor a seis UMAs (conf. arts. 15, 16 y 58 de la ley 27.423).

A los fines de resolver, cabe tener presente lo resuelto por el Máximo Tribunal sobre la cuestión en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A c/ Misiones, Provincia de s/ Acción declarativa” (sentencia del 4 de septiembre de 2018). En dicho precedente, la Corte Suprema sostuvo que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación, motivo por el cual el nuevo régimen legal – ley 27.423- no resulta aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la anterior ley 21.839.

Amén de las disposiciones del art. 7º del Decreto 1077/17, corresponde señalar que el art. 64 de la ley 27.423, al igual que la ley en su conjunto, entraron en vigor a partir del día 31 de diciembre de 2017.

Cabe reconocer, que la primera interpretación que se hizo, en el fuero de la Seguridad Social, del precedente “Las Marías”, fue en similar sentido al realizado por el Sr. Procurador en su dictamen en el precedente “Morales Blanca Azucena”. Prueba de ello es, incluso, la primera regulación de honorarios efectuada en estos actuados y que la propia letrada de la parte actora no cuestionó en su momento.

Ahora bien, la Excma. C.S.J.N. al fallar en el citado caso “Morales” se remitió al dictamen del Señor Procurador Fiscal, con excepción del segundo y tercer párrafo del acápite IV y del segundo y tercer párrafo del acápite VI.

Precisamente, el no seguimiento por parte del Alto Tribunal en lo relativo a los alcances e implicancias del precedente “Las Marías”, imponen al suscripto rever mi posición al respecto, sostenida hasta el presente.

Una correcta interpretación lleva a que toda actuación procesal efectuada por una/un





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

letrada/o en vigencia de la ley 27.423, debe ser regulada conforme a sus disposiciones. Asimismo, toda actuación realizada durante la vigencia de la ley 21.839 y que se encontrase pendiente de regulación, habrá de efectuarse con las disposiciones arancelarias anteriores. Prueba de ello basta citar las resoluciones dictadas por la Excma. CSJN en autos: “Helman Alfredo Jacobo c/ M° de justicia y DDHH s/ indemnizaciones-ley 24.043 -art. 3°” de fecha 3 de agosto de 2023, “Boccardo, Liliana” del 23 de mayo de 2023 y “BDR SAICFI” del 4 de marzo de 2021, por solo citar algunos.

Ahora bien, de la compulsa de las presentes actuaciones, se desprende que todo lo actuado por la Dra. Bonet en etapa de ejecución fue en vigencia de la ley 27.423, tal como acertadamente lo señala el colega preopinante.

En tal inteligencia, a mi entender se encuentran reunidos los presupuestos para hacer lugar a la aclaratoria solicitada y, en consecuencia, revocar “in extremis” la Sentencia Interlocutoria de fecha 8/11/2022.

En lo que respecta a la pretensión de regulación, a la luz de las disposiciones del art. 58 de la ley 27.423, cabe remitirse al precedente de esta Sala [“Ortega José Bernardino” \(Expte. 83060/2011\)](#).

Consecuentemente, habré de propiciar regular los honorarios correspondientes a la Dra. Susana Lidia Bonet, en la suma de 5 (cinco) UMAs, equivalentes a \$ 126.865.- (cfme. Res. CSJN 2722/2023).

Por lo expuesto, voto por hacer lugar al pedido de aclaratoria, propiciando una revocatoria in extremis de la providencia de fecha 8/11/2022 y en consecuencia, revocar la resolución de primera instancia por la que se fijaron los honorarios en favor de la Dra. Bonet por su actuación en etapa de ejecución en la cantidad de \$750; elevar dicho monto a la suma de 5 (cinco) UMAs, equivalentes a \$ 126.865.- (cfme. Res. CSJN 2722/2023). Suma que no incluye I.V.A. y el cual deberá adicionarse según corresponda (cfr. Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación” sent. del 16/06/93).

A mérito de lo que resulta del acuerdo mayoritario, el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar la nulidad de la Sentencia Interlocutoria de fecha 8 de noviembre de 2022; 2) Revocar los honorarios regulados en la resolución de fecha 23 de marzo de 2022; 3) Fijar los emolumentos correspondientes a la Dra. Susana Lidia Bonet T° 12 F° 812, por las tareas desarrolladas en la segunda etapa ejecutiva, en la cantidad de tres UMA equivalentes a la fecha del dictado de la presente resolución a la suma de \$76.119 (conf. Res. C.S.J.N. 2722/2023, arts. 16, 29 inc. f, 51 y 58 de la ley 27.423), con la adición del IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación” sent. del 16/06/93).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

Ante mí: MARINA MALVA D`ONOFRIO

Secretaria de Cámara



#31123875#354257247#20231012121138845